

SOBRE LAS “CONFIRMACIONES REALES” Y LAS “GRACIAS AL SACAR” EN LA HISTORIA DEL DERECHO INDIANO

por José María OTS CAPDEQUÍ

Nos proponemos en estas líneas hacer algunas observaciones sobre dos figuras jurídicas del derecho indiano: las “reales confirmaciones” y las “gracias al sacar”.

Se trata de dos figuras jurídicas muy diferentes entre sí pero las dos muy representativas de la política seguida por el estado español en América.

Una y otra figura jurídica son, claro está, sobradamente conocidas. Pero, a nuestro juicio, ninguna de las dos ha sido todavía suficientemente estudiada en toda la complejidad de su contenido respectivo y sobre todo de sus proyecciones históricas sobre la vida institucional de los pueblos hispanoamericanos durante el periodo de la dominación española.

1. Las “confirmaciones reales”

Un gran tratadista del derecho indiano, Antonio de León Pinelo, publicó en Madrid en 1630 un libro muy valioso titulado: “Tratado de Confirmaciones Reales de Encomiendas Oficios y casos, en que se requieren para las Indias Occidentales”. De este libro se hizo una reedición facsimilar en 1922 por la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires.

Antonio de León Pinelo nos ofrece en esta obra noticias históricas de gran interés sobre las encomiendas de indios, sobre los oficios vendibles y renunciabiles, y sobre las “Cavallerias y Peonias de tierras, i demás casos, que requieren confirmación”.

Vale la pena de recordar estas noticias, comentándolas debidamente; y, sobre todo, hacer un estudio de las “confirmaciones reales” encuadrándolas y valorándolas como es obligado dentro de la actuación política del estado espa-

ñol en América, cosa que no hizo este autor y que es, sin embargo, de singular importancia.

a) *Las encomiendas de indios y las “reales confirmaciones”*

Cuando Pinelo escribía su libro, las encomiendas de indios, de tan larga proyección histórica, habían entrado tiempo hacía, en la curva de su decadencia.

Muy lejos quedaban ya aquellas apasionadas polémicas doctrinales sobre su licitud o su no conveniencia, de la etapa insular de la colonización y aun de la primera fase de la etapa continental. Después de las “Leyes Nuevas” de 1543, los *servicios personales* de los indios dentro de las encomiendas habían sido, al menos teóricamente, abolidos. El problema del indio seguía en pie: pero en cuanto al régimen de trabajo de los aborígenes privaba otra institución: la *mita* con su sistema de trabajo forzoso pero retribuido. Los indios de los pueblos dados en encomienda, sólo estaban sujetos al pago de un *tributo* –tasado por las autoridades– en beneficio de sus encomenderos.

La encomienda, por lo tanto, había dejado de ser una institución importante en el orden social y solo era una *gracia o merced del rey* que proporcionaba a los beneficiarios un rendimiento económico, mayor o menor según los casos.

Por eso Antonio de León Pinelo, después de un estudio minucioso sobre los orígenes y evolución histórica de las *encomiendas* y sobre las características jurídicas más principales de esta institución, se fija particularmente en la cuestión de si esta *gracia o merced real*, cuando era concedida por las autoridades coloniales facultadas al respecto, debía obtener para lograr plena validez jurídica la *real confirmación*.

Y dice sobre el particular:

... como es forzoso, que estos títulos se despachen en las Yndias por estar en ellas los Repartimientos, i la provisión de los mas, cometida a los ministros, que allá asisten: se ordenó que de todos estos títulos se llevasse confirmación real, . . . con término de quatro años, contados desde la data del titulo: i que passados, i no la llevando, los frutos de la Encomienda se metiessen en la Real caxa, hasta que la confirmación se presentasse.¹

¹ Antonio de León Pinelo. *Tratado de Confirmaciones Reales de Encomiendas, Oficios y casos, en que se requieren para las Indias Occidentales*. Madrid, 1630. Se hizo una reedición facsimilar en Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1922, cap. XVII, parte 1.

Esta *real confirmación* había de solicitarse, a juicio de Pinelo, incluso por aquellos que habían sido agraciados con la *encomienda* por medio de una Cédula Real: “porque de otra suerte –añade nuestro autor– no podrá en el Consejo, ni en la Secretaría de mercedes quedar, ni saberse la razón dellas, ni quales están cumplidas o no.”²

En cambio, no era necesaria la *confirmación* real para los que sucediesen en segunda vida, en el disfrute de la *encomienda*.

b) La venta y renunciación de los oficios públicos y la real confirmación

Hemos de recordar que la provisión de los oficios públicos fue considerada como una *regalía* de la corona. Los reyes hicieron uso distinto de esta *regalía*, según los casos, los tiempos y las circunstancias.

Sería alejarnos demasiado de los fines de este estudio, tratar de presentar ahora una exposición detallada de la evolución histórica que tuvo el principio expuesto.

Basta con recordar, con palabras de León Pinelo, que:

... al principio de la población de aquellas Provincias –las de las Indias Occidentales– todos los oficios que oy son vendibles, fueron de gracia: porque los Reyes, o gratificando servicios hechos, ó animando descubrimientos intentados, hazian dellos merced a los vasallos.

Pero mas tarde,

las mercedes de oficios ... se acabaron: i aunque las rentas Reales fueron creciendo, las excedieron luego tanto los gastos, que para acudir a todos, se tuvieron por muy cortas: i fué necessario buscar medios que pudiesen conservar la Real hacienda desta Corona: que como al passo de su grandeza crecieron y se multiplicaron sus obligaciones, i se le opuso la emulación, i embidia de las naciones estrangeras mucho parece poco para sustentarlas.³

Fue entonces la época de los *arbitristas* y entre los *arbitrios* que se idearon para incrementar los ingresos del fisco, figuró uno que tuvo repercusión grande en la

² *Ibid.*, cap. XVII, parte 1.

³ *Ibid.*, cap. I, parte II.

vida municipal de villas y ciudades; la enajenación de los oficios concejiles, a título de perpetuos y renunciables.

En algunas publicaciones nuestras hemos estudiado a fondo el régimen municipal hispanoamericano del periodo colonial.⁴

Hemos visto en las publicaciones de referencia que el municipio de las nuevas ciudades de América, fue un fiel trasplante del municipio leonés y castellano del periodo de los descubrimientos.

Pero así como en la metrópoli, los cabildos municipales se encontraban en un momento de franca decadencia, después de las reformas institucionales de Alfonso XI –generalización de los corregidores al frente de las ciudades importantes–, y de los reyes católicos –creación y fortalecimiento del estado nacional–, en las nuevas ciudades de América, jugaron los cabildos concejiles papel histórico muy destacado, actuando como órganos aglutinantes y coordinadores de lo que pudiéramos llamar el *estado llano* de la colonización, que pudo así hacer frente a los privilegios excesivos de los grandes descubridores y a los posibles abusos de poder de las altas autoridades estatales.

Sin embargo, este florecimiento municipal de la etapa insular de la colonización –y aun de la primera fase de la etapa continental– hizo quiebra al generalizarse en América, en tiempos de Felipe II, la enajenación de los oficios públicos concejiles, y su adjudicación en pública subasta –a título de perpetuos y renunciables.

Significó esto que los adjudicatarios de estos oficios los adquirirían por toda su vida; y, además, que cuando lo creyeran oportuno los podían *renunciar* en favor de alguno de sus familiares. O sea, que el interés fiscal prevaleció sobre el interés político, ya que poco a poco, por este procedimiento, cayeron los cabildos municipales en manos de verdaderas oligarquías cuyos componentes ya no representaban los intereses de la comunidad ciudadana.

Las reformas municipales de Carlos III, enclavadas dentro del régimen de intendencias, no lograron resolver satisfactoriamente este problema, pues si de un lado lograron sanear las haciendas de los municipios, disminuyeron todavía mas las viejas autonomías de los cabildantes.

Antonio de León Pinelo elude, naturalmente, el estudio de todas estas cuestiones, y solamente se limita a enumerar los oficios públicos –concejiles y otros– vendibles en las Indias, requisitos que se habían de observar en su adjudicación, cuales de estos oficios podían ser *renunciables* –incluso aquellos que pudieron serlo a pesar de haber sido concedidos por *merced*–, condiciones en que había de ha-

⁴ Véase mi trabajo: "El municipio hispanoamericano del periodo colonial" en mi libro *Estudios de historia del derecho español en las Indias*. Bogotá, 1940.

cerse la *renunciación* –entre las que destaca que la renunciación se hiciera por escrito y en persona capaz, digna y hábil– y, por último, necesidad de que todos los rematantes, adjudicatarios y renunciatarios de estos oficios, obtuvieran la *real confirmación*.

Este último requisito, el de la confirmación real, es el que Pinelo estudia con una minuciosidad mayor. Pero fácilmente se advierte que en estos casos, la figura jurídica de la *real confirmación* tuvo sólo por objeto la defensa del interés fiscal, con olvido del interés político. Lo que importaba en España era saber en todo momento si por el oficio público enajenado se había satisfecho por el adjudicatario una cantidad adecuada a su valor; y cuando se trataba de *renunciaciones*, si habían sido hecho efectivos los tantos por ciento de su valor, estipulados por las leyes.

c) La real confirmación y las mercedes o remates de tierras baldías o realengas

También las tierras *baldías* de todos los territorios de las Indias fueron consideradas como *regalía* de la corona; por eso se designaron indistintamente con el nombre de *baldías o realengas*.⁵

Y por ser esto así, los títulos originarios para la adquisición del dominio privado de estas tierras fueron: los *repartimientos* –realizados por los jefes de las expediciones colonizadoras al amparo de los privilegios concedidos en las capitulaciones, o por las altas autoridades coloniales facultadas al efecto– y las *reales cédulas*, ordinarias o extraordinarias, de *gracia o merced*.

Estas primeras mercedes de tierras se hicieron siempre a título gratuito, en recompensa de servicios prestados o simplemente para fomentar las actividades colonizadoras.

Se habían de realizar estas adjudicaciones sin perjuicio de los indios ni de terceros, y con la obligación por parte de los adjudicatarios de roturarlas y poseerlas de manera efectiva –y no con mera *posesión en el papel*– durante un plazo de tiempo que varió según los casos: cuatro, cinco y hasta ocho años. Sólo con el cumplimiento de estos requisitos, quedaba el dominio consolidado.

Cuando se avanzó en la etapa continental de la colonización y ya en la época de los *arbitristas*, a que anteriormente hemos aludido, surgió un nuevo título para la adquisición del dominio privado de las tierras *baldías o realengas*: la adjudicación en pública subasta al rematante mejor postor.

⁵ Véase mi libro *España en América. El régimen de tierras en la época colonial*. México, 1959.

Y es que con el aumento de la densidad de la población en comarcas determinadas, la propiedad de la tierra se hizo más codiciable para los particulares, y estas adjudicaciones en *remate* llegaron a ser para el fisco una fuente de ingresos relativamente importante. Persistieron las mercedes de tierras a título *gratuito*; pero estas nuevas adjudicaciones a título *oneroso* pasaron a un primer plano. Y aunque no se abandonó la defensa del *interés económico* –posesión efectiva y cultivo de las tierras adjudicadas– se procuró armonizar estas exigencias con la defensa del *interés fiscal*.

Según Antonio de León Pinelo, de las mercedes de tierras hechas a *título gratuito* se había de solicitar *real confirmación*. Advierte, sin embargo, que en la práctica no se cumplía con este requisito, “sino que los virreyes daban las tierras a quien les parecía, i su título era bastante”. Tampoco se obligó a solicitar la confirmación real en los casos de adjudicaciones en remate y a título *oneroso* “porque no estaba ordenado”. Pero el propio Pinelo nos informa que ya en los primeros años del siglo XVII, se ordenó con carácter general en defensa de los intereses del fisco, que los compradores de estas tierras *baldías o realengas* “quedassen obligados a llevar confirmación del Rey dentro de tres años, contados desde las datas de los títulos”⁶

Estas noticias de Pinelo son fundamentalmente corroboradas por repetidos testimonios legales. Algunos de éstos, sin embargo, acreditan que la confirmación de las adjudicaciones de tierras de la corona realizadas por cualquiera de los títulos estudiados, no había de solicitarse siempre de la propia persona del rey.

Las dificultades que implicaba el tener que acudir precisamente a la corte para conseguir la confirmación de las adjudicaciones de tierras hechas en las Indias, motivo que en la práctica se prescindiese de este requisito: era mucho el tiempo que su tramitación requería y muy considerables los gastos que ocasionaba.

En 24 de noviembre de 1745 quiso el monarca atajar esta costumbre viciosa que podía perjudicar los intereses del fisco y ordenó:

que los que entrasen en los bienes realengos de aquellos dominios (de los Reinos de las Indias) acudiesen precisamente a mi Real Persona a impetrar su confirmación en el termino que les asigno baxo la pena de su perdimiento, si no lo hiciesen...

Pero los hechos fueron más fuertes que la propia voluntad del soberano y ante el retraimiento que entre los particulares produjo la rigidez de la anterior disposición –con grave daño de la economía colonial– se admitió en las Instruc-

⁶ Antonio de León Pinelo, *op. cit.*, cap. XXIII, parte II.

ciones de 1754 que la confirmación pudiera ser solicitada y obtenida de las autoridades de su distrito y demás ministros, a quienes se comete esta facultad por esta nueva instrucción:

los cuales en vista de el proceso, que se hubiere formado, por los subdelegados en orden a la medida y avalúo de las tales tierras y del título que se les hubiere despachado, examinaran si la venta o composición está hecha sin fraude, ni colusión y en precios proporcionados, equitativos con vista y audiencia de los fiscales para que con atención a todo, y constando haber entrado en cajas reales el precio de la venta o composición y derecho de media anata respectivo, y haciendo de nuevo aquel servicio pecuniario, que parezca correspondiente, les despachen en mi Real nombre la confirmación de sus títulos, con los cuales quedará legitimada, con la posesión y dominio de tales tierras, aguas o baldíos, sin poder en tiempo alguno ser sobre ello inquietados los poseedores ni sus sucesores, universales ni particulares.

Y esta doctrina fue la que, desde entonces y para lo sucesivo, hubo de prevalecer.

d) *Otros casos en que se requería la real confirmación*

Cierra Antonio de León Pinelo su estudio sobre la real confirmación, con estas palabras:

Requierese también confirmación Real en todas las ordenanzas i estatutos, que en las Indias hizieren los Virreyes, Audiencias, Governadores, Universidades, Comunidades, Ciudades, i Villas, Hospitales i Colegios; pero con esta distinción, que las ordenanzas, que los Virreyes hazen, se executan luego; i aunque de algunas se embia a pedir confirmación, las mas pasan, i se guardan sin ella, aun pendiente la apelacion dellas. Lo mismo es de las que hazen las Audencias, si bien estas son pocas; porque como no tienen el gobierno no les toca esta parte del. Las que hazen los Governadores, Ciudades, ô Villas, i las demas Comunidades, no se pueden executar, sin que esten aprovadas por el Virrey, ô Audiencia del distrito, que las manda guardar; con que dentro de año i medio las presente ante el Rey, i saquen confirmación termino, que no tiene pena; i parece lo será, que passados quatro, o cinco años, como para los officios estan señalados, si no se presentare la confirmación, i huviere quien lo oponga, se suspenderan las tales ordenanças. Por lo qual se han confirmado muchas de Ciudades, de Universidades, Colegios, Hospitales, Hermandades i Consulados.

Últimamente, como regla general, se advierte, que:

de todas las cosas, que ò por cantidad, calidad, valor, ò perpetuidad, se reputan por grandes, i considerables, ò sean contratos, o privilegios, facultades, ò concessiones, que los Virreyes, Audiencias, ô Governadores hagan en nombre del Rey, como ministros suyos, para lo qual no constare, que tienen especial poder, ò que se entiende a ello el general que tuvieren, deven contratar, hazer o conceder, con cargo de llevar confirmación.⁷

Pero para comprender en todo su significado histórico estas noticias de nuestro autor, es conveniente que recordemos algunas observaciones que en diversos estudios nuestros hemos formulado sobre el funcionamiento político de las distintas instituciones estatales en las Indias.

Ya hemos aludido anteriormente al carácter *mixto*, con predominio de las *aportaciones privadas*, que se acusa en las expediciones de descubrimiento, conquista y colonización.

Por ser esto así fueron tantos los privilegios que se concedieron en las *capitulaciones* a los grandes conquistadores y a sus descendientes; y, por la misma razón, tuvieron que ser no menores las facultades de mando otorgadas por los reyes a las autoridades coloniales. En definitiva, si el éxito sorprendente de la *conquista* se debió principalmente al esfuerzo heroico de hombres como Hernán Cortés, Pizarro y otros, la *continuidad* en la empresa colonizadora sólo fue posible por la actuación tenaz y sostenida de una *burocracia* –virreyes, oidores, etcétera–, sabiamente jerarquizada.

La enormidad de las distancias y la dificultad de las comunicaciones, exigía por otra parte que las altas autoridades coloniales tuvieran amplios poderes para hacer frente a cuantas eventualidades se presentasen. Pero estas mismas circunstancias justifican la desconfianza de la corona frente a posibles abusos de poder que pudieran quedar impunes.

De aquí toda una serie de medidas encaminadas a salvar las dificultades que derivaban de imperativos tan contradictorios: amplitud de facultades en las reales cédulas en que se hacía el nombramiento de virreyes, capitanes generales y gobernadores, pero condicionamiento del ejercicio de estas facultades por medio de *instrucciones* minuciosas a las cuales habían de ajustarse durante el desempeño de sus mandatos; *equilibrio de poderes* entre los virreyes y los reales acuerdos de las audiencias; obligación de informar exigida con rigurosidad acuciante; *visitas y juicios de residencia*; y, por último, necesidad de la *real confirmación*

⁷ *Ibid.*, cap. XXLLL, parte II.

para que no pocas de sus resoluciones y muchos de sus actos de gobierno adquiriesen plena validez jurídica.

2. Las llamadas “*gracias al sacar*”

Ya hemos dicho que, institucionalmente, esta figura jurídica fue de un interés menor. Se trataba, simplemente, de un ingreso fiscal: la percepción de una cantidad, de cuantía variable, por la concesión de una *dispensa de ley*, fue considerada como una *gracia* y por eso el nombre de *gracias al sacar* empleado para su designación.

Teóricamente se trataba de una figura jurídica contra la cual no había nada que objetar. Mediante ella, adquiría la legislación de la época una gran flexibilidad en su aplicación, siempre aconsejable en principio, sin que se quebrantase virtualmente la integridad de la doctrina.

Pero se generalizó su aplicación de manera notoriamente excesiva y así resultó una vez más que en amplias esferas del derecho todo quedase supeditado a la defensa del interés fiscal.

En esta desnaturalización, sin embargo, de la figura jurídica que hoy estudiamos, radica precisamente su interés histórico actual para los investigadores de nuestros días.

Un arancel de lo que se había de percibir por cada una de estas gracias al sacar, publicado en 3 de agosto de 1801, corrobora plenamente nuestros asertos.⁸

La lista de las que se consideraban entonces como posibles *gracias al sacar*, y los derechos fiscales que por las mismas se habían de satisfacer, era como sigue:

“Por la facultad para fundar mayorazgo, veinte mil reales de vellón.” Por las confirmaciones de mayorazgos ya existentes, lo mismo; Por suplemento de edad para ser Escribanos, Procuradores, Médicos, Cirujanos, Boticarios y otros oficios de esta clase, mil doscientos reales por cada año que se habilite; Por suplemento de edad para ser Regidor en Ciudad Capital de Provincia, cuatro mil quinientos reales por cada año de los que faltasen a los interesados para cumplir los diez y ocho exigidos por las Leyes; En las otras Ciudades, mil quinientos; En las Villas y Pueblos de españoles, setecientos cincuenta; En los suplementos de edad para otros oficios de República, se regularan las cuotas según estas mismas bases; En los suplementos de edad a menores para administrar sus bienes sin intervención de Tutor o Curador, por cada año que se les habilite, tres mil quinientos reales; Por “el suplemento de no estar confir-

⁸ Véase mi libro: *Las instituciones del Nuevo Reino de Granada al tiempo de la independencia*. Madrid, 1958.

mado a alguna Villa o lugar, comunidad o particular, un privilegio por alguno de los Señores Reyes antecesores”, cuatro mil quinientos reales por cada reinado; Por “dispensación de las Leyes a que están sujetos los oficios renunciabiles por haberse descuidado algún poseedor en cumplir alguno de sus requisitos; se verificara primero el valor del oficio y siendo el heredero el que pide la dispensa, se regulara el servicio por la mitad de su valor y se percibirá la tercera parte, entendiéndose la dispensa sólo por los días de su vida”; Por el suplemento en un oficio renunciable “de no haver vivido el renunciante los veinte días después de la fecha de la renuncia... la quarta sexta parte de su valor”; Por “la facultad perpetua de poder nombrar Teniente que sirva tal clase de oficios, se regulara la tercera quarta parte de su valor por el servicio y si fuera de por vida, la sexta octava”; Por “la licencia para servir oficios de mayorazgos por los días de la vida de sus poseedores en las Ciudades Capitales de Provincia, será el servicio de quatro mil y quinientos”; “En las que no lo son, dos mil y ochocientos”; “Y en las Villas y lugares de Españoles, ochocientos”; “Por las exenciones de jurisdicción a los Pueblos o lugares, así realengos como de Señorío que se hacen Villas, deberán servir por cada vecino con seiscientos cinquenta”; Por el título de muy noble, leal u otro semejante a ciudad o villa, mil quinientos; Por licencia para que un particular pueda cerrar y acotar algún cortijo o tierras propias o de sus mayorazgos, si practicada información no se opusieran los que tuvieran participación en los pastos, veinte y dos reales por fanega; Por licencia para firmar con estampilla, seis mil reales; Por dispensa de edad a una mujer menor de veinticinco años para ser tutora de los hijos que tuvo con su difunto marido, dos mil setecientos reales por cada año dispensado; Por licencia a mujer viuda para que a pesar de contraer segundas nupcias pueda continuar con la tutela de los hijos habidos en su primer matrimonio, nueve mil reales; “La cuota anterior se debe aumentar según las calidades de personas y bienes”; Por licencia a una mujer para tener abierta botica regentada por mancebo aprobado, tres mil setecientos reales, si es en Ciudad Capital de provincia; En las que no lo son, tres mil”; “Y en las Villas y lugares de Españoles dos mil quatrocientos”; Por licencia para servir empleo de Real Hacienda siendo mercader al por menor, “si es en Ciudad Capital de provincia, nueve mil”; “En las que no lo son, seis mil”; “Y en las Villas o lugares de Españoles, dos mil ochocientos”; Por licencia para ser al mismo tiempo Regidor y Escribano en Villas y lugares de Españoles, dos mil ochocientos reales, “si fueren de mayor población”; “Y en las de menor población, mil quinientos”; Por licencia a un Regidor para que el y los que le sucedan en el Oficio puedan elegir y ser elegidos Alcaldes el año que les toque por suerte con tal que en el no tengan mas que un voto, quatro mil y quinientos, si es en Ciudad Capital de provincia”; “En las que no lo son, dos mil ochocientos”; “Y en las Villas y lugares de Españoles, mil y ochocientos”; “Por licencia para servir oficio de Regidor en una Ciudad, sin embargo de serlo en otra, mil y doscientos”; “Pero combendrá no conceder estas licencias a causa de ser incompatibles y perjudiciales”; “Por licencia para que un Regidor y su sucesor en el Oficio puedan entrar con espada en el Ayuntamiento, nueve mil”; “Por licencia para sufrir el examen de Escribano en lugar distinto al de la Audiencia respectiva, deberá fijar esta el servicio según la distancia dispensada, debiendo ser de dos mil ochocientos quando no exeda de cin-

cuenta leguas”; “En pasando de esta distancia, tres mil por cada diez leguas”; “Y guardando esta proporción, en las demás”; “Por licencia para sufrir examen de Medico, Boticario y Cirujano fuera del lugar en que radique el Proto Medicato respectivo, deberá señalar este Tribunal el servicio según las circunstancias y distancia”; “Por permiso a los provistos en empleo para prestar juramento en lugar distinto, si se tratara del Consejo, y el agraciado residiera en la Península, mil quinientos”; “Si se tratara de Tribunales de Indias, fijarán estos el servicio según la distancia”; “Por licencia a un Clérigo que sea Abogado para poder ejercer este Oficio en pleitos civiles, dos mil ochocientos”; “Por licencia para permutar bienes de mayorazgos, cinco mil quinientos”; “Por la gracia de que pueda gozar un vínculo su poseedor sin la obligada residencia, seis mil”; “Por licencia para subrogar censos pertenecientes a Patronatos en otras fincas, dos mil seiscientos cincuenta”; “Por el suplemento de ser hijos de Padres no conocidos para servir oficio de Escribano, seis mil”; “Por legitimación de hijos para heredar a sus padres que los hubieran habido siendo ambos solteros, cinco mil quinientos”; “Por legitimaciones extraordinarias para heredar y gozar de la nobleza de sus Padres a hijos de Caballeros profesos de las Órdenes Militares y casados y otros de Clérigos, treinta y tres mil”; “Por legitimaciones de la misma clase a hijos habidos por mujeres solteras siendo sus padres casados, veinte y cinco mil ochocientos”; “Por privilegios de hidalguía, ciento y siete mil”; “Por declaración de hidalguía y nobleza de sangre, sesenta, ochenta y cien mil, según la justificación que se presente y entronques”; “Por merced de Título de Castilla a sujeto residente en Indias a quien se hubiere de dispensar algún requisito, fijara la Cámara la cuota del servicio”; “Observando providencia de la Cámara de 1785 no se dará publicidad al pago de este servicio”; “Por licencia a extranjeros para pasar a las Indias, la cantidad que la Cámara estime conveniente en atención a las circunstancias”; “Por licencia para residir en las Indias, ocho mil doscientos”; “Por carta de naturaleza para Indias cuando no falte al interesado ninguna de las circunstancias previstas por las leyes, ocho mil doscientos”; “Cuando hubiera que dispensar algún requisito, fijara la Cámara el aumento”; “Por licencia a encomenderos para residir en la Península, mil cuatrocientos”; “Por la gracia para poner cadenas a las puertas, si es Comunidad catorce mil cuatrocientos”; “Si es un particular, diez mil ochocientos”; “Por Títulos de armas a ciudad o persona particular, mil cuatrocientos”; “Por distintivo de Don, mil cuatrocientos”; “Por gracias de las no especificadas en este Arancel que sean para obtener Empleos honoríficos de República, ocho mil doscientos, si es Ciudad Capital de provincia”; “En las que no lo son, cuatro mil doscientos”; “En las Villas y Pueblos de Españoles, dos mil ciento”; “Por la gracia de Regidor honorario y Padre general de menores con voz y voto en Ayuntamiento de Ciudad Capital de provincia, cincuenta y cuatro mil”; “En las que no lo son cuarenta y un mil”; “Por dispensación de la calidad de Pardo, setecientos”; “De la calidad de Quinterón, mil ciento”; “Otras gracias de menor cuantía pueden promoverse en la Cámara de Indias y proponerse a S.M., siendo propio del Consejo graduar y fijar el servicio correspondiente.” Como aclaración complementaria se añadía que “todas las gracias que se concedan estarán sujetas al derecho de la media annata”.

Insistimos en resaltar el alto valor histórico del documento que acabamos de transcribir, ya que es un claro exponente de un sistema jurídico en franca decadencia. Frente al interés fiscal se dejaba en suspenso, sin escrúpulos, preceptos legales que acertada o equivocadamente, habían sido respaldados por una larga tradición.

No implica esto la sustitución de una doctrina por otra. Los principios siguen en pie; pero se les interpreta ahora con una caprichosa flexibilidad para convertir su antiguo rigor en una fuente de ingresos muy considerable. Y la *gracia o merced real* se prodiga –eso sí, siempre con su cuenta y razón– con amplia generosidad, lo mismo en la esfera del derecho público que en la del derecho privado. Pocas facetas del interés pecuniario de los súbditos, o de la simple vanidad social, que pudieran ser susceptibles de explotación por parte del fisco, escaparon a los avisados redactores de este arancel.